



**PROCEDIMIENTO**  
**ORDINARIO**

**SANCIONADOR**

**EXPEDIENTE:** 12/2022-PSO-CG.

**DENUNCIADO:** Partido de la Revolución Democrática

**AUTORIDAD SUSTANCIADORA:** Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral

**AUTORIDAD RESOLUTORA:** Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

Guanajuato, Guanajuato diecisiete de agosto de dos mil veintitrés.

Resolución que dicta el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato en el procedimiento sancionador ordinario al rubro indicado, en que se determina el incumplimiento del Partido de la Revolución Democrática a sus obligaciones en materia de transparencia, relativas a la omisión de dar el trámite correspondiente a la solicitud de cancelación de datos personales, los cuales obran en sus archivos, registros, expedientes y sistemas, por lo que se estaría contraviniendo a lo dispuesto en el artículo 194, fracción II de la *Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Guanajuato*. Con lo que se considera que existe una infracción a la normatividad electoral conforme a lo dispuesto en el artículo 443, punto 1, inciso k, de la *Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales*, en relación con los artículos 33, fracción XXIII y 346, fracción VIII, de la *ley electoral local*.

## **GLOSARIO**

<i>Comisión de Quejas y Denuncias:</i>	Comisión de Quejas y Denuncias del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
<i>Consejo General:</i>	Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
<i>Constitución:</i>	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
<i>Instituto:</i>	Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
<i>IACIP:</i>	Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato
<i>Ley de transparencia:</i>	Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato
<i>Ley electoral local:</i>	Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato
<i>LGIFE:</i>	Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales
<i>Ley de partidos:</i>	Ley General de Partidos Políticos
<i>PRD:</i>	Partido de la Revolución Democrática

<i>Ley General de Protección de datos personales</i>	Ley general de protección de datos personales posesión de sujetos obligados
<i>Ley de protección de datos personales</i>	Ley de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados para el Estado de Guanajuato
<i>Reglamento de quejas y denuncias:</i>	Reglamento de Quejas y Denuncias del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato
<i>Sala Superior:</i>	Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
<i>INE</i>	Instituto Nacional Electoral
<i>UTJCE:</i>	Unidad Técnica Jurídica y de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato

## ANTECEDENTES

**1. Vista por parte del IACIP.** El 28 de octubre de 2022, se recibió en la *UTJCE* el oficio IACIP/PPI-100/19/2022, mediante el cual se notifica el instructivo de fecha 12 de octubre de 2022, referente al número de expediente RRPDP-9/2022.

Del instructivo en cita, se desprende que el titular de la Unidad de Transparencia del Partido de la Revolución Democrática omitió dar trámite correspondiente a la solicitud de cancelación de datos personales, los cuales obran en sus archivos,

registros, expedientes, sistemas, por lo que se estaría contraviniendo a lo dispuesto en el artículo 194, fracción II de la *Ley de protección de datos personales*.

Conforme a lo establecido en el punto del considerando IV del instructivo referente al número de expediente RRPDP-9/2022, se ordenó dar vista al *Instituto*, para que resolviera lo conducente. En este sentido, es obligación del instituto político de referencia cumplir con las obligaciones que en materia de transparencia le impone el 33 fracción XXIII y 346 fracción VIII de la *ley electoral local*, y con fundamento en el artículo 195 de la *Ley de protección de datos personales*.

**Radicación, registro y reserva de admisión o desechamiento.** El 7 de noviembre de 2022, se radicó y registró el procedimiento sancionador ordinario con el número de expediente 12/2022-PSO-CG.

**2. Diligencias de Investigación preliminar.** Mediante auto de fecha 7 de noviembre de 2022, la *UTJCE* ordenó requerir al *IACIP* para tener mayores elementos, por lo que se le solicitó a dicho órgano garante que remitiera copia certificada del expediente RRPDP-9/2022, iniciado contra el Partido de la Revolución Democrática por el incumplimiento a sus obligaciones en materia de datos personales.

**3. Cumplimiento a requerimiento.** El 18 de noviembre de 2022 se recibió el oficio IACIP/SGA-124/10/2022, mediante el cual se dio cumplimiento al requerimiento contenido en el auto de fecha 7 de noviembre de 2022.

**4. Requerimiento al *PRD*.** Mediante auto de fecha 30 de noviembre de 2022, la *UTJCE* ordenó requerir al instituto político *PRD*.

**5. Ampliación del plazo de investigación.** El 22 de diciembre de 2022, feneció el plazo de los cuarenta días para que la *UTJCE* llevara a cabo la investigación dentro

del procedimiento sancionador que nos ocupa, y en la misma fecha se ordenó la ampliación de dicho plazo a efecto de contar con todos los elementos necesarios para la resolución del presente asunto.

**6. Cumplimiento a requerimiento.** El 23 de enero de 2023 se recibió el original del escrito signado por José Belmonte Jaramillo, representante del *PRD* ante el *Consejo General*, ante la *UTJCE*, mismo que mediante acuerdo de la misma fecha se dio cumplimiento al requerimiento contenido en el auto de fecha 30 de noviembre de 2022.

**7. Requerimiento de información al *INE*.** Mediante auto de fecha 26 de enero de 2023, la *UTJCE*, ordenó requerir al *INE*.

**8. Contestación a requerimiento.** El 3 de febrero de 2023, se recibió el oficio *INE/GTO/JLE/VRFE/No./0723/2023* signado por Verónica Fabiola González Gamiño, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del *INE*, mediante el cual se dio cumplimiento al requerimiento contenido en el auto de fecha 26 de enero de 2023.

**9. Segundo requerimiento de información al *INE*.** Mediante auto de fecha 3 de febrero de 2023, la *UTJCE*, ordenó requerir al *INE*.

**10. Contestación a requerimiento.** El 10 de febrero de 2023, se recibió el oficio *INE/GTO/JLE/VRFE/No./0859/2023* signado por Verónica Fabiola González Gamiño, vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del *INE*, mediante el cual se dio cumplimiento al requerimiento contenido en el auto de fecha 3 de febrero de 2023.

**11. Requerimiento de información.** El 14 de febrero de 2023, se ordenó requerir al ciudadano Rafael Gasca López.

**12. Contestación a requerimiento.** El 17 de febrero de 2023, se recibió el escrito signado por Rafael Gasca López, mediante el cual dio cumplimiento al requerimiento contenido en el auto de fecha 14 de febrero de 2023.

**13. Requerimiento de información al ciudadano.** El 20 de febrero de 2023, se ordenó requerir al ciudadano Rafael Gasca López.

**14. Contestación a requerimiento.** El 28 de febrero de 2023, se recibió el escrito signado por Rafael Gasca López, mediante el cual dio cumplimiento al requerimiento contenido en el auto de fecha 20 de febrero de 2023.

**15. Admisión y emplazamiento.** El 6 de marzo de 2023, la *UTJCE* admitió el procedimiento sancionador ordinario que nos ocupa. Asimismo, se ordenó emplazar al *PRD* para que manifestara lo que a su interés legal conviniera respecto a la imputación formulada en su contra corriéndole traslado con las constancias pertinentes.

**16. Contestación al emplazamiento.** El 22 de marzo de 2023, se dio cuenta de la recepción del escrito presentado por el representante propietario del *PRD ante el Consejo General*, mediante el cual contesta a la imputación formulada y solicita que mediante Oficialía Electoral se corrobore la inexistencia de diversas ligas electrónicas. Dicha respuesta otorgada se realizó de manera extemporánea al término señalado por la ley, no obstante, a efecto no vulnerar su garantía de audiencia y debido proceso, se ordenó llevar a cabo la inspección de oficialía electoral.

**17. Solicitud de apoyo a la Unidad de Oficialía Electoral.** El 22 de marzo de 2023, se ordenó solicitar apoyo a la Unidad de Oficialía Electoral a efecto de que se diera fe de la existencia y contenido de diversas ligas electrónicas.

**18. Contestación a solicitud de apoyo.** El 23 de marzo de 2023, se recibió el oficio OE/111/2023, signado por Carlos Enrique Flores Casas, Titular de la Unidad de Oficialía Electoral de este *Instituto*, por medio del cual remite el acta de oficialía electoral identificada con la clave **ACTA-OE-IEEG-SE-038/2023**.

**19. Vista y cierre de instrucción.** El 11 de abril de 2023, una vez recabadas las constancias necesarias y al estar en posibilidades de elaborar el proyecto de resolución correspondiente la *UTJCE* determinó el cierre de instrucción y ordenó poner a la vista del *PRD* el expediente respectivo.

**20. Elaboración del proyecto de resolución.** El 26 de abril de 2023, se ordenó elaborar el proyecto de resolución del procedimiento ordinario sancionador 12/2022-PSO-CG, en virtud de haber concluido el periodo de vista otorgado al *denunciado*. Lo anterior con fundamento en el párrafo primero del artículo 368 de la *ley electoral local*.

Mediante auto de fecha 15 de mayo de 2023, la *UTJCE* ordenó la ampliación de plazo para la elaboración del proyecto resolución de procedimiento en el que se actúa. Lo anterior con fundamento en el párrafo primero del artículo 368 de la *ley electoral local*.

**21. Recepción de acuerdo por el que se tiene al *PRD* por no acatando resolución.** Mediante oficio IACIP.PPI.54.20/2023, se notificó el instructivo de fecha 17 de mayo de 2023, referente al número de expediente RRPDP-9/2022, recibido el 25 de mayo de 2023, en el que el *IACIP* acordó tener al sujeto obligado *PRD*, por no acatando a lo ordenado en la resolución de fecha 28 de septiembre de 2022.

**22. Remisión del anteproyecto de resolución a la *Comisión de Quejas y Denuncias*.** Mediante el oficio UTJCE/0734/2023, signado por el titular de la

UTJCE, el 16 de junio de 2023 se remitió a la *Comisión de Quejas y Denuncias*, el proyecto de resolución del expediente 12/2022-PSO-CG.

**Aprobación del proyecto de resolución por la *Comisión de Quejas y Denuncias*.** En la sesión extraordinaria del diez de julio de dos mil veintitrés, la *Comisión de Quejas* aprobó el proyecto de resolución y ordenó su remisión al *Consejo General* para los efectos a que se refiere el párrafo último del artículo 368, de la *Ley electoral local*.

**23. Remisión del proyecto de resolución al *Consejo General*.** Mediante oficio CQyD/045/2023, signado por la presidenta de la *Comisión de Quejas*, el dieciocho de julio de dos mil veintitrés se remitió al *Consejo General*, el proyecto de resolución.

#### **CONSIDERANDO:**

**PRIMERO. Competencia.** Este *Consejo General* es competente para conocer y resolver el presente procedimiento sancionador ordinario, con fundamento en los artículos 356, párrafo primero, fracción I, 361, 367 y 369 de la *Ley electoral local*; 10, párrafo primero, fracción I y 96 del *reglamento de quejas y denuncias*.

Por otra parte, es importante invocar la jurisprudencia 25/2015,<sup>1</sup> emitida por la *Sala Superior*, cuyo rubro es: **COMPETENCIA. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN PARA CONOCER, SUSTANCIAR Y RESOLVER PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES**, mediante la cual se determinó que, para establecer la competencia de las autoridades electorales locales para conocer de un procedimiento sancionador, debe analizarse si la irregularidad denunciada:

---

<sup>1</sup> Emitida por la Sala Superior en sesión celebrada el veintiséis de agosto de dos mil quince, que puede consultarse en la Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 8, Número 17, 2015, páginas 16 y 17.

- i) Se encuentra prevista como infracción en la normativa electoral local;
- ii) Impacta solo en la elección local, de manera que no se encuentra relacionada con los comicios federales;
- iii) Está acotada al territorio de una entidad federativa, y
- iv) No se trata de una conducta ilícita cuya denuncia corresponda conocer a la autoridad nacional electoral y a la Sala Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En atención a lo expuesto en el punto anterior, este *Consejo General* es competente para resolver el procedimiento sancionador que nos ocupa, pues se actualiza el primero de los supuestos que el citado criterio jurisprudencial señala.

Esto es, en la legislación electoral local se encuentra prevista como una infracción en que pueden incurrir los partidos políticos el incumplimiento a las obligaciones en materia de transparencia, pues el artículo 346, fracción VIII, de la *Ley electoral local*, señala:

**Artículo 346.** Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:  
[...]  
VIII. El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente Ley en materia de transparencia y acceso a la información.

Asimismo, existe la obligación expresa que el diverso artículo 33, fracción XXIII de la *Ley electoral local* impone a los partidos políticos:

**Artículo 33.** Son obligaciones de los partidos políticos:  
[...]  
**XXIII.** Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a la información les impone;  
[...]

Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el *PRD* tenga registro nacional,

puesto que nuestra legislación electoral local prevé a los partidos políticos nacionales y locales como sujetos de derechos y obligaciones, sin distinción alguna.

En ese tenor, es menester transcribir lo previsto en los siguientes preceptos de la *Ley electoral local*, en los que se corrobora la competencia de este órgano para resolver el asunto:

**Artículo 30.** Los partidos políticos nacionales gozarán de personalidad jurídica para todos los efectos legales y se sujetarán a las disposiciones de esta Ley en los procesos electorales locales; los estatales gozarán de esa personalidad desde el momento en que obtengan su registro ante el citado Instituto Estatal.

**Artículo 44.** El incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta Sección será sancionado en los términos que dispone la ley de la materia, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en la Ley General.

Ahora bien, con motivo del antecedente 22, fue recibido el oficio IACIP.PPI.54.20/2023, por el que se notificó el instructivo de fecha 17 de mayo de 2023, referente al número de expediente RRPDP-9/2022, recibido el 25 de mayo de 2023, en el que el *IACIP* acordó tener al sujeto obligado *PRD*, por no acatando a lo ordenado en la resolución de fecha 28 de septiembre de 2022, misma que sirve para efecto de análisis del fondo del presente asunto por parte de este *Consejo General*, por lo que se considera como prueba superveniente. Lo anterior es así ya que dicha probanza forma parte del expediente RRPDP-9/2022, mismo que fue requerido al *IACIP* por parte de la *UTJCE*, tal y como se señaló en el antecedente 3 de la presente resolución.

Sirve a lo anterior, lo dispuesto por el artículo 98 del *Reglamento de Quejas y Denuncias*, que a la letra dice:

**Artículo 98.** El Consejo General podrá admitir aquellos elementos probatorios que, habiendo sido solicitados por los órganos del Instituto dentro de la investigación correspondiente, no se hubiesen recibido sino hasta veinticuatro horas antes de la sesión respectiva.

**SEGUNDO. Procedencia de la vía.** Toda vez que los hechos materia de este expediente no corresponden a las conductas previstas por el artículo 370 de la *Ley electoral local*, que se tramitan por la vía especial, esto es, no corresponden a conductas que violen lo establecido en el párrafo octavo del artículo 134 de la *Constitución* (fracción I); o, contravengan las normas sobre propaganda política o electoral (fracción II); o bien, constituyan actos anticipados de precampaña y campaña (fracción III); se concluye que el **procedimiento sancionador ordinario** resultó la vía adecuada para la sustanciación del presente procedimiento, como fue establecido mediante auto del 7 de noviembre de 2022.

**TERCERO. Causas de sobreseimiento.** En el presente asunto no se actualiza alguna causa de sobreseimiento, como se advierte a continuación:

La causal de sobreseimiento que se prevé en la fracción I, del artículo 365 de la *Ley electoral local* no se actualiza, ya que durante el trámite del presente procedimiento no se materializó alguna de las causales de improcedencia que contempla el numeral 364 de dicha ley.

En efecto, las causales de improcedencia previstas en las fracciones I y II del artículo 364 de la *Ley electoral local* no se actualizan, toda vez que el procedimiento sancionador ordinario que se resuelve no versa sobre presuntas violaciones a la normatividad interna de un partido político, ni fue tramitado a instancia de algún militante de partido político, sino que se instauró oficiosamente por la *UTJCE* en uso de las facultades previstas en el artículo 361 de la citada legislación.

La hipótesis prevista en la fracción III del artículo 364 de la *Ley electoral local* tampoco se actualiza, toda vez que el procedimiento ordinario sancionador que ahora se resuelve, relacionado con el incumplimiento del *PRD* a sus obligaciones en materia de protección de datos personales, no ha sido materia de otra queja o denuncia en que se haya emitido una resolución por parte de este *Instituto*.

La causal de improcedencia establecida en el artículo 364, fracción IV de la *Ley electoral local* tampoco se actualiza ya que, conforme a lo señalado en el considerando primero de esta resolución, esta autoridad sí es competente para conocer y resolver el procedimiento sancionador ordinario que nos ocupa.

Por otra parte, el *PRD*, no ha perdido su registro como partido político nacional, por lo que no se materializa la causa de sobreseimiento que establece el artículo 365, fracción II de la *Ley electoral local*.

Por último, no se actualiza el supuesto que establece la fracción III del artículo 365 de la *Ley electoral local* para decretar el sobreseimiento de la presente causa, toda vez que fue iniciada oficiosamente ante la comunicación rendida por el *IACIP* relacionada con el incumplimiento del *PRD* a sus obligaciones en materia de protección de datos personales.

De acuerdo con lo anterior, al no haberse actualizado alguna causa de sobreseimiento, procede realizar el estudio de fondo del asunto.

#### **CUARTO. ESTUDIO DE FONDO.**

##### **1. Planteamiento del caso.**

El *IACIP* mediante el instructivo del 12 de octubre de 2022, dio vista a este *Instituto*, respecto del incumplimiento del *PRD* a dar el trámite correspondiente a la solicitud

de cancelación de datos personales, los cuales obran en sus archivos, registros, expedientes y sistemas, por lo que se estaría contraviniendo a lo dispuesto en el artículo 194, fracción II, de la *Ley de protección de datos personales* que a la letra dice:

**Artículo 194.** Serán causas de responsabilidad administrativa por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, las siguientes:

[...]

II. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley para responder las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO o para hacer efectivo el derecho de que se trate;

[...]

Asimismo, la *Ley electoral local* contiene un capítulo en que se establecen los sujetos de responsabilidad, conductas reprochables y sanciones aplicables a cada caso.

Dentro de los sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a la *Ley electoral local*, se encuentran los partidos políticos, de conformidad con lo establecido en su artículo 346.

Por cuanto hace a las conductas sancionables, los numerales 33, fracción XXIII y 346, fracción VIII de la ley citada, prevén que se considera una infracción el incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública por parte de los partidos políticos.

En el mismo tenor, la *ley de partidos* precisa en sus artículos 25, párrafo 1, inciso x); 27 y 28, párrafo 1, que los partidos políticos deben cumplir con las disposiciones

legales en materia de transparencia y acceso a la información, y en ese sentido, deben acatar las reglas relativas a esa materia establecidas en dicha ley, además de lo ordenado por otras leyes:

**Artículo 25.**

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

[...]

x) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su información les impone;

[...]

**Artículo 27.**

1. Las disposiciones del presente Capítulo son de carácter obligatorio para los partidos políticos sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación en materia de transparencia.

**Artículo 28.**

1. Toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos políticos de conformidad con las normas previstas en este Capítulo y en la legislación en materia de transparencia y acceso a la información. El organismo autónomo garante en materia de transparencia tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales en posesión de los partidos políticos.

[...]

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, apartado A, fracciones II y III, de la *Constitución* establece que la información que se refiere a la vida privada y los datos personales serán protegidas en los términos y con las excepciones que fijen las leyes; así también, dispone que toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a sus datos personales o a la rectificación de éstos.

En el mismo sentido, pero en el artículo 16, párrafo segundo, la *Constitución* dispone que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos<sup>2</sup>, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rigen el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.

En ese contexto, considerando que el derecho de protección de datos personales es un derecho humano que trae aparejada la expectativa jurídica positiva (de prestación) o negativa (de no lesión), consecuentemente conlleva a diversas obligaciones encaminadas a respetar, garantizar, proteger y promover el ejercicio pleno al acceso, rectificación, cancelación u oposición en el tratamiento de los datos personales de la persona titular.

En esos términos, de conformidad con los artículos 2, fracción II y 3, fracción XXIX de *Ley de protección de datos personales* son **responsables** en materia de protección de datos personales:

- I. En el ámbito estatal de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos;
- II. En el ámbito municipal de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de la administración pública municipal; y
- III. Los **partidos políticos**, fideicomisos y fondos públicos.

Cabe precisar que, las personas físicas, morales o sindicatos, quedan excluidas del ámbito de competencia de la *Ley de protección de datos personales*, toda vez que,

---

<sup>2</sup> En lo subsecuente derechos ARCO.

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la *Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares* son sujetos regulados por la misma, aquellas personas físicas o morales de carácter privado que lleven a cabo el tratamiento de datos personales, salvo las sociedades de información crediticia en los supuestos que determine la *Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia* y demás disposiciones aplicables; así como las personas que lleven a cabo la recolección y almacenamiento de datos personales, que sea para uso exclusivamente personal, y sin fines de divulgación o utilización comercial.

Ahora bien, para garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de datos personales en posesión de los **responsables**, la persona titular de los datos, por sí mismo o a través de su representante, podrá interponer el recurso de revisión ante la Unidad de Transparencia del sujeto responsable que conoció de la solicitud de derechos ARCO o bien, ante el órgano garante, en el ámbito local será el IACIP<sup>3</sup>.

Para la procedencia del recurso de revisión, el artículo 129 de la *Ley de protección de datos personales*, establece las siguientes causales:

- I. Se clasifiquen los datos personales sin que se cumplan las formalidades señaladas en la Ley de Transparencia y demás normatividad que resulte aplicable;
- II. Se declare la inexistencia de los datos personales;
- III. Se declare la incompetencia del responsable;
- IV. Se entreguen datos personales incompletos;
- V. Se entreguen datos personales que no correspondan con lo solicitado;
- VI. Se niegue el acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales;

---

<sup>3</sup> Artículo 127 de la *Ley de protección de datos personales*.

- VII. No se dé respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO, dentro de los plazos establecidos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia;**
- VIII.** Se entregue o ponga a disposición datos personales en una modalidad o formato distinto al solicitado, o en un formato incomprensible;
- IX.** El titular se inconforme con los costos de reproducción, envío o certificación, o bien, tiempos de entrega de los datos personales;
- X.** Se obstaculice el ejercicio de los derechos *ARCO*, a pesar de que fue notificada la procedencia de los mismos;
- XI.** No se dé trámite a una solicitud para el ejercicio de los derechos *ARCO*;
- XII.** Derogada; y
- XIII.** En los demás casos que dispongan las leyes.

En ese sentido, de conformidad con los artículos 123, fracción I, 127 y 129, fracción VII de la *Ley de protección de datos personales*, el *IACIP* como organismo garante, en el ámbito de sus atribuciones es competente para conocer y resolver el recurso de revisión presentado por la persona titular de los datos personales cuando no se dé respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos *ARCO*, dentro de los plazos establecidos en la ley, es decir, dentro de los veinte días contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud de derecho *ARCO* o bien, en treinta días cuando exista justificación fundada y motivada para dicha ampliación del plazo<sup>4</sup>.

En ese tenor, dentro de los cuarenta días, contados a partir del día siguiente de la presentación del recurso de revisión, el *IACIP* debe pronunciarse en su resolución sobre los plazos de cumplimiento y los procedimientos para que la persona titular pueda ejercer el derecho a la protección de datos personales en posesión del sujeto responsable de su tratamiento.

---

<sup>4</sup> Artículo 80 de la *Ley de protección de datos personales*.

También debe considerarse que de conformidad con el artículo 151 de la *Ley de protección de datos personales*, las resoluciones que emita el *IACIP* son vinculatorias, definitivas e inatacables para los responsables y únicamente podrán ser impugnadas por el afectado ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales (INAI) mediante el recurso de inconformidad o ante el Poder Judicial de la Federación mediante el juicio de amparo.

Asimismo, en términos del artículo 180 de la *Ley de protección de datos personales*, el *IACIP* verificará el cumplimiento a la resolución a través de los informes de cumplimiento a los que se encuentra obligado a rendir el sujeto responsable. Si consideran que se dio cumplimiento a la resolución, se emitirá un acuerdo de cumplimiento y se ordenará el cierre del expediente. Si consideran que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución, le notificarán al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento, para que, en un plazo no mayor a cinco días hábiles manifieste lo que a su derecho convenga y en su caso, se impongan las medidas de apremio establecidas en el artículo 182 de dicho ordenamiento. Para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones. Finalmente, transcurrido el plazo, sin que se haya dado cumplimiento a lo ordenado en la resolución, el *IACIP* dará vista a la autoridad competente en materia de responsabilidades.

El título décimo cuarto de la *Ley de protección de datos personales* que se denomina “Responsabilidades Administrativas” dispone en el artículo 194, fracción II, así como su penúltimo y último párrafo, que será causa de responsabilidad administrativa el incumplir los plazos de atención previstos para responder las solicitudes para el ejercicio de los derechos *ARCO* o para hacer efectivo el derecho de que se trate y que esta causa será considerada como grave para efectos de su sanción administrativa. Por último, se establece que en caso de que la presunta infracción hubiere sido cometida por algún integrante de un partido político, la investigación y,

en su caso, sanción, corresponderá a la autoridad electoral competente, caso que acontece y razón por la cual se instauró el presente procedimiento ordinario sancionador, pues como lo señala el artículo 195 de la *Ley de protección de datos personales*, a saber:

#### ***Infracciones de partidos políticos***

***Artículo 195. Ante incumplimientos por parte de los partidos políticos, el Instituto dará vista, según corresponda, al Instituto Nacional Electoral o el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para que investigue, resuelva y, en su caso, sancione lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables.***

De lo anteriormente expuesto es posible concluir que:

- Los partidos políticos son responsables en materia de protección de datos personales y, como tales, podrán ser sujetos de sanción en caso de incumplir con las disposiciones y principios en la materia.
- El *IACIP* es responsable de garantizar en nuestro estado el ejercicio de los derechos *ARCO*. Entre sus atribuciones se encuentra la de sustanciar y resolver el recurso de revisión en contra de los partidos políticos por la probable responsabilidad en el incumplimiento de atención a solicitud de ejercicio de derechos *ARCO*, en cualquiera de sus modalidades, esto es, acceso, rectificación, cancelación y oposición en el tratamiento de datos personales.
- Las determinaciones del *IACIP* son vinculatorias, definitivas e inatacables para los responsables de uso y disposición de datos personales. Únicamente podrán ser impugnadas por los titulares de los datos personales ante el INAI

a través del recurso de inconformidad o ante el Poder Judicial de la Federación, mediante la interposición del juicio de amparo.

- Ante incumplimientos de las disposiciones y principios en materia de protección de datos personales por parte de los partidos políticos, el *IACIP* debe dar vista al *Instituto* o al *INE* según corresponda, para que resuelva lo conducente.

En conclusión, la ruta de tramitación de un asunto como el que se resuelve es:

- I.* Interposición de recurso de revisión por persona titular de datos personales por alguna de las causales del artículo 129 de la *Ley de protección de datos personales*.
- II.* Radicación del recurso de revisión por parte del *IACIP*.
- III.* Sustanciación y resolución del *IACIP* con respecto a la actualización de la hipótesis prevista en el artículo 129 de la *Ley de protección de Datos Personales*.
- IV.* Interposición del recurso de inconformidad o el juicio de amparo ante autoridad competente cuando la persona titular de los datos personales considera que la determinación del *IACIP* no garantiza el pleno ejercicio de sus derechos *ARCO* en términos de la normativa aplicable.
- V.* Verificación de *IACIP* respecto al cumplimiento de la resolución por parte del sujeto responsable y en su caso, imposición de los medios de apremio para asegurar el cumplimiento de sus determinaciones.
- VI.* Vista del *IACIP* al *Instituto* para para que investigue, resuelva y, en su caso, sancione lo conducente, ante infracciones de partidos políticos a las disposiciones y principios de la *Ley de protección de datos personales*.

Sentado lo anterior, conviene precisar los hechos atribuidos al *PRD* y la temporalidad en que acontecieron, como se detalla enseguida:

El 6 de julio de 2022, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, la titular de datos personales solicitó la cancelación/oposición de sus datos personales a la Unidad de Transparencia del sujeto obligado el instituto político *PRD*, siendo éste omiso a dicha solicitud.

El 8 de agosto de 2022, la persona solicitante interpuso el recurso de revisión ante el *IACIP* en contra de la falta de respuesta a la solicitud del ejercicio de sus derechos *ARCO*.

El 28 de septiembre de 2022, el *IACIP* revocó la falta de respuesta por la Unidad de Transparencia del *PRD* a la solicitud de cancelación de datos personales de la recurrente y se ordenó a dicho sujeto obligado que en un plazo de diez días hábiles dé cumplimiento a la misma, en términos del artículo 194, fracción II de la *Ley de protección de datos personales*.

Mediante instructivo de fecha 12 de octubre de 2022, el *IACIP* ordenó dar vista a este *Instituto* a fin de resolver lo conducente. Dicho instructivo fue notificado el 28 de octubre de 2022.

Mediante instructivo de fecha 17 de mayo de 2023, el *IACIP* acordó tener al sujeto obligado *PRD*, por no acatando a lo ordenado en la resolución de fecha 28 de septiembre de 2022.

En tal sentido, de conformidad con la *Ley de protección de datos personales*, se establece que, entre otras obligaciones los sujetos obligados —en este caso los partidos políticos— deben cumplir con lo siguiente:

«**Artículo 2.** Son objetivos de la presente Ley:

- I. Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados;
- II. Proteger los datos personales en posesión de los siguientes sujetos obligados:  
[...]  
c) Así como de los partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos.»

«**Artículo 3.** Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

[...]

IX. Derechos ARCO: los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales;»

«**Artículo 194.** Serán causas de responsabilidad administrativa por incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Ley, las siguientes:

[...]

II. Incumplir los plazos de atención previstos en la presente Ley para responder las solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO o para hacer efectivo el derecho de que se trate;»

«**Artículo 195.** Ante incumplimientos por parte de los partidos políticos, el Instituto dará vista, según corresponda, al Instituto Nacional Electoral o el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, para que investigue, resuelva y, en su caso, sancione lo conducente, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en las leyes aplicables.»

Por lo que hace a la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública* refiere:

«**Artículo 68.** Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán:

I. Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de datos, en los casos que sea procedente, así como capacitar a los Servidores Públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de conformidad con la normatividad aplicable;»

## **2. Respuesta al emplazamiento y vista de alegatos.**

Mediante auto dictado el 06 de marzo de 2023, se ordenó emplazar al *PRD* y se hizo de su conocimiento los hechos que se le imputaban.

Luego de ello, mediante proveído del 22 de marzo de 2023 se hizo constar que el *PRD* a través de José Belmonte Jaramillo en su carácter de representante del referido partido ante el *Instituto*, presentó escrito de contestación al emplazamiento respectivo. Cabe precisar que dicho escrito fue presentado de manera extemporánea, tal y como quedó asentado en el antecedente 17 de esta resolución.

En respuesta al emplazamiento formulado por la *UTJCE*, el representante del *PRD* expresó, entre otras cuestiones las siguientes:

[...]

Mediante el presente escrito, de conformidad y en atención al auto de fecha del 06 de marzo de 2023, dentro del Procedimiento Sancionador Ordinario, expediente 12/2022-PSO-CG, emitido por Usted, en donde se radica y emplaza al Procedimiento Sancionador Ordinario en contra del Instituto Político que represento, solicitando de desde estos momentos se decrete el sobreseimiento y archivo del mismo, toda vez que, al estar ya admitido el medio de impugnación que nos ocupa, sobrevino la desaparición de las causas que lo motivaron, esto, al ya no estar vigente y publicada en la web o redes de internet la página Web oficial del *PRD* Guanajuato con la dirección <https://prdguanajuato.org.mxy> y los links de las direcciones electrónicas: <https://prdguanajuato.org/personal-operativo/> y <https://prdguanajuato.org/comite->

transparencia/, según se puede corroborar al intentar ingresar en el internet a la página y links arriba citados.

[...]

Debido a lo anterior, este *Consejo General* considera que no ha lugar a los argumentos vertidos por el representante del *PRD*, a efecto de decretar el sobreseimiento y archivo del presente asunto, debido al evidente incumplimiento a sus obligaciones en materia de protección de datos personales, motivo por el que el *IACIP* ordenó dar vista a este *Instituto* a fin de iniciar el presente procedimiento sancionador ordinario.

### **3. Fijación de la Controversia.**

La materia del presente procedimiento sancionador ordinario consiste en determinar la responsabilidad y, en su caso, la sanción que corresponda al *PRD*, derivado del incumplimiento a su obligación prevista en el artículo 33 fracción XXIII de la *Ley electoral local*, que establece que los partidos políticos deben cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su información les impone.

Lo cual, actualiza la infracción prevista en el diverso numeral 346 fracción VIII del mismo ordenamiento, en relación con los artículos 25 párrafo 1 inciso x); 27 y 28 de la *ley de partidos*, ello al haber omitido cumplir con su obligación en materia de protección de datos personales, en concreto, por la falta de respuesta a la solicitud de cancelación de datos personales en los plazos establecidos por la ley de materia, contraviniendo a lo dispuesto por el artículo 194, fracción II de la *Ley de protección de datos personales*.

#### **3.1. Marco normativo.**

Para determinar lo conducente respecto a la conducta en estudio, es necesario acudir a la legislación que establece **el deber que tienen los partidos políticos, de cumplir con sus obligaciones del manejo de datos personales en posesión de sujetos obligados.**

La *Constitución* establece las siguientes obligaciones en materia de protección de datos personales:

**«Artículo 6.**

[...]

**A.** Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

**I.** Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información.

**II.** La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes.

**III.** Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.»

**«Artículo 16.**

[...]

Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los

términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.»

### **3.1.1 Marco internacional**

Asimismo, resulta relevante citar las disposiciones establecidas en algunos instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano en materia de protección de datos personales:

#### **Declaración Universal de los Derechos del Hombre**

**Artículo 12.** Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

#### **Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos**

**Artículo 17.**

1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y reputación.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

#### **Convención Americana sobre Derechos Humanos**

**Artículo 11.** Protección de la Honra y de la Dignidad

1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad.
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de su familia, en su domicilio o en su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación.

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o esos ataques.

Dichas disposiciones reconocen el derecho a la vida privada de las personas, conforme al cual, deben reservarse sus datos personales y la demás información relativa a su vida privada que estén en poder de algún ente público o de particulares, y protegerse de la posible utilización indebida por terceros. Ese derecho concede a su titular, la atribución de resguardar ese ámbito privado, garantizándoles el poder de decidir sobre la publicidad de los datos de su persona, lo que supone la facultad de elegir cuáles pueden ser conocidos y cuáles deben permanecer en reserva, además de designar quién y bajo qué modalidades pueden utilizarlos, dado que la protección de datos personales incluye el derecho de autodeterminación informativa como uno de los fines para propiciar la confiabilidad en el manejo y cuidado de las referencias concernientes a las personas en el ámbito de su vida privada, así el Estado a través de sus órganos adoptará las medidas tendentes a hacer efectiva la tutela del referido derecho.

Ahora bien, es importante desglosar el significado de los siguientes términos, conforme a las definiciones que otorga el artículo 3 de la *Ley General de Protección de Datos Personales*:

**Bases de datos:** Conjunto ordenado de datos personales referentes a una persona física identificada o identificable, condicionados a criterios determinados, con independencia de la forma o modalidad de su creación, tipo de soporte, procesamiento, almacenamiento y organización;

**Datos personales:** Cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. Se considera que una persona es identificable cuando su identidad pueda determinarse directa o indirectamente a través de cualquier información;

**Datos personales sensibles:** Aquellos que se refieran a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. De manera enunciativa más no limitativa, se consideran sensibles los datos personales que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente o futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, opiniones políticas y preferencia sexual;

**Derechos ARCO:** Los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales;

**Responsable:** Los sujetos obligados a que se refiere el artículo 1 de esta ley que deciden sobre el tratamiento de datos personales;

**Titular:** La persona física a quien corresponden los datos personales.

En ese sentido, la *Ley General de Protección de Datos Personales*, establecen las siguientes porciones normativas y que guardan relación con este asunto:

**«Artículo 1**

[...]

Son sujetos obligados por esta Ley, en el ámbito federal, estatal y municipal, cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, **partidos políticos**, fideicomisos y fondos públicos.»

**«Artículo 2.** Son objetivos de la presente Ley:

[...]

VI. Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de los datos personales;

[...]

**«Artículo 6.** El Estado garantizará la privacidad de los individuos y deberá

velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por razones de seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud pública o para proteger los derechos de terceros.»

«**Artículo 43.** En todo momento el titular o su representante podrán solicitar al responsable, el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales que le conciernen, de conformidad con lo establecido en el presente Título. El ejercicio de cualquiera de los derechos *ARCO* no es requisito previo, ni impide el ejercicio de otro.»

«**Artículo 46.** El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último.»

Ahora bien, la *Ley de protección de datos personales*, previene en lo que interesa al presente asunto lo que se cita a continuación:

«**Artículo 2.** Son objetivos de la presente Ley:

I. Garantizar que toda persona pueda ejercer el derecho a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados;

II. Proteger los datos personales en posesión de los siguientes sujetos obligados:

[...]

c) Así como de los **partidos políticos**, fideicomisos y fondos públicos.»

«**Artículo 7.** Las Autoridades garantizarán la privacidad de los individuos y deberán velar porque terceras personas no incurran en conductas que puedan afectarla arbitrariamente.

El derecho a la protección de los datos personales solamente se limitará por

razones de seguridad nacional, en términos de la ley en la materia, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.»

«**Artículo 62.** En todo momento el titular o su representante podrán solicitar al responsable el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de los datos personales que le concierne, de conformidad con lo establecido en el presente Título. El ejercicio de cualquiera de los derechos *ARCO* no es requisito previo, ni impide el ejercicio de otro.»

«**Artículo 65.** El titular tendrá derecho a solicitar la cancelación de sus datos personales de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los mismos ya no estén en su posesión y dejen de ser tratados por este último.»

Conforme a la normativa anteriormente señalada, tenemos que los partidos políticos son sujetos obligados a la protección de datos personales que obren en su poder, y en caso de no hacerlo, pueden ser sujetos de responsabilidades y sancionados en consecuencia.

Finalmente, con relación al marco normativo es necesario señalar lo que establece la *Ley electoral local*:

«**Artículo 346.** Constituyen infracciones de los partidos políticos a la presente Ley:

[...]

**VIII.** El incumplimiento de las obligaciones establecidas por la presente Ley en materia de transparencia y acceso a la información;»

Por otra parte, la *ley de partidos* señala en lo conducente:

«**Artículo 25.**

1. Son obligaciones de los partidos políticos:

[...]

x) Cumplir con las obligaciones que la legislación en materia de transparencia y acceso a su información les impone;

[...]

y) Las demás que establezcan las leyes federales o locales aplicables.»

**«Artículo 27.**

1. Las disposiciones del presente Capítulo son de carácter obligatorio para los partidos políticos sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación en materia de transparencia.»

**«Artículo 28.**

1. Toda persona tiene derecho a acceder a la información de los partidos políticos de conformidad con las normas previstas en este Capítulo y en la legislación en materia de transparencia y acceso a la información. El organismo autónomo garante en materia de transparencia tendrá competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y **la protección de datos personales en posesión de los partidos políticos.**

2. Las personas accederán a la información de los partidos políticos de manera directa, en los términos que disponga la ley a que se refiere el artículo 6 constitucional en materia de transparencia.

3. La legislación de la materia establecerá los órganos, formatos, procedimientos y plazos para desahogar las solicitudes que se presenten sobre la información de los partidos políticos.»

**«Artículo 33.**

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este Capítulo será sancionado en los términos que dispone la ley de la materia, sin perjuicio de las sanciones establecidas para los partidos políticos en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.»

## **QUINTO. Pruebas.**

Respecto de las pruebas aportadas por el *IACIP* y las recabadas por la autoridad sustanciadora en el transcurso de la investigación del presente procedimiento

sancionador se tienen las siguientes **documentales**:

Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente	Pruebas obtenidas	Análisis	Valoración
El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, mediante el instructivo de fecha 12 de octubre de 2022, referente al número de expediente RRPDP-9/2022, ordenó dar vista al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para que resuelva lo conducente.	1. <b>Oficio IACIP/PPI-100/19/2022</b> , recibido el 28 de octubre de 2022, al cual se adjuntó: 1.1 <b>Instructivo</b> de fecha 12 de octubre de 2022.	Del instructivo de fecha 12 de octubre de 2022, se advierte que se <b>ordenó dar vista Instituto Electoral del Estado de Guanajuato</b> , a efecto de que resuelva lo conducente.	Las probanzas descritas, tienen el carácter de <b>documentales públicas</b> , conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso a) y 462, párrafo segundo de la LGIPE; 359, segundo párrafo y 411, fracción II de la Ley electoral local y 91, segundo párrafo del reglamento de quejas y denuncias; cuyo <b>valor probatorio es pleno</b> , por haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones y no ser contradictorias entre sí.
Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente	Pruebas obtenidas	Análisis	Valoración
La <i>Unidad Técnica Jurídica</i> , mediante el oficio <b>UTJCE/123/2022</b> , del 7 de noviembre de 2022, requirió al Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, a fin de que proporcionara copia del expediente RRPDP-9/2022.	1. <b>Oficio IACIP/SGA-124/19/2022</b> de fecha 15 de noviembre del 2022, signado por el licenciado Luis Alberto Cubilla Mojica, mediante el cual se adjunta: 1.1 Copia certificada del expediente RRPDP-9/2022. 1.1.1 Resolución de fecha 28 de septiembre de 2022.	Del expediente RRPDP-9/2022, se advierte el incumplimiento del sujeto obligado el partido político <i>PRD</i> a la solicitud de cancelación de los datos personales de la recurrente. Lo anterior derivado de la resolución de fecha 28 de septiembre de 2022, dictada por el pleno del <i>IACIP</i> .	Las probanzas descritas, tienen el carácter de <b>documentales públicas</b> , conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso a) y 462, párrafo segundo de la LGIPE; 359, segundo párrafo y 411, fracción II de la Ley electoral local y 91, segundo párrafo del reglamento de quejas y denuncias; cuyo <b>valor probatorio es pleno</b> , por haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio

			de sus funciones y no ser contradictorias entre sí.
Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente	Pruebas obtenidas	Análisis	Valoración
La <i>Unidad Técnica Jurídica</i> , mediante el oficio <b>UTJCE/0068/2023</b> , del 26 de enero de 2023, requirió al Vocal del Registro Federal de Electores, a efecto de que proporcionara el domicilio del ciudadano Rafael Gasca López.	1. <b>Oficio INE/GTO/JLE/VRFE /No./0723/2023</b> de fecha 2 de febrero de 2023, signado por la Licenciada Verónica Fabiola González Gamiño Vocal del Registro Federal de Electores.	Mediante original del oficio <b>INE/GTO/JLE/VRFE/No./ 0723/2023</b> , la Vocal del Registro Federal de Electores señaló que existe un caso de homonimia con relación al nombre del ciudadano Rafael Gasca López.	Las probanzas descritas, tienen el carácter de <b>documentales públicas</b> , conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso a) y 462, párrafo segundo de la LGIPE; 359, segundo párrafo y 411, fracción II de la Ley electoral local y 91, segundo párrafo del reglamento de quejas y denuncias; cuyo <b>valor probatorio es pleno</b> , por haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones y no ser contradictorias entre sí.
Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente	Pruebas obtenidas	Análisis	Valoración
La <i>Unidad Técnica Jurídica</i> , mediante el oficio <b>UTJCE/0102/2023</b> , del 3 de febrero de 2023, requirió al Vocal del Registro Federal de Electores, a efecto de que proporcionara el domicilio del ciudadano Rafael Gasca López.	1. <b>Oficio INE/GTO/JLE/VRFE /No./0859/2023</b> de fecha 8 de febrero de 2023, signado por la Licenciada Verónica Fabiola González Gamiño Vocal del Registro Federal de Electores.	Mediante original del oficio <b>INE/GTO/JLE/VRFE/No./ 0859/2023</b> , la Vocal del Registro Federal de Electores señaló los registros a nombre de Rafael Gasca López.	Las probanzas descritas, tienen el carácter de <b>documentales públicas</b> , conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso a) y 462, párrafo segundo de la LGIPE; 359, segundo párrafo y 411, fracción II de la Ley electoral local y 91, segundopárrafo del reglamento de quejas y denuncias; cuyo <b>valor probatorio es pleno</b> , por haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones y no ser contradictorias entre sí.
Forma en la que se allegaron las	Pruebas obtenidas	Análisis	Valoración

probanzas expediente	al		
<p>Mediante el auto dictado el 22 de marzo de 2023 por la <i>Unidad Técnica Jurídica</i>, se ordenó solicitar el apoyo a la Unidad de Oficialía Electoral de este <i>Instituto</i> a efecto de que diera fe de la existencia y contenido de tres ligas electrónicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="https://prdguajauato.org.mx">https://prdguajauato.org.mx</a></li> <li>• <a href="https://prdguajauato.org/personal-operativo/">https://prdguajauato.org/personal-operativo/</a></li> <li>• <a href="https://prdguajauato.org/comitetransparencia/">https://prdguajauato.org/comitetransparencia/</a></li> </ul> <p>Lo anterior derivado de la solicitud del escrito de contestación realizada por el denunciado.</p>	<p><b>1. Original del oficio</b> OE/111/2023 de fecha 22 de marzo 2023, signado por el licenciado Carlos Enrique Flores Casas, titular de la Unidad de Oficialía Electoral de este <i>Instituto</i>, al cual adjunta:</p> <p><b>1.1 Copia certificada</b> del acta de oficialía electoral identificada con la clave <b>ACTA-OE-IEEG-SE-038/2023</b>.</p>	<p>De la copia certificada del acta de oficialía electoral identificada con la clave <b>ACTA-OE-IEEG-SE-038/2023</b>, se advierte la <b>certificación de las ligas electrónicas</b>, mismas en las que se demuestra que el contenido de ellas ya no existe.</p>	<p>Las probanzas descritas, tienen el carácter de <b>documentales públicas</b>, conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso a) y 462, párrafo segundo de la LGIPE; 359, segundo párrafo y 411, fracción II de la Ley electoral local y 91, segundo párrafo del reglamento de quejas y denuncias; cuyo <b>valor probatorio es pleno</b>, por haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones y no ser contradictorias entre sí.</p>
<p>El Pleno del Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, mediante el instructivo de fecha 17 de mayo de 2023, referente al número de expediente RRPDP-9/2022, ordenó dar vista al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato para que resolviera lo conducente.</p>	<p><b>1. Oficio IACIP/PPI-54.20/2023</b>, recibido el 25 de mayo de 2023, al cual se adjuntó:</p> <p><b>1.1 Instructivo</b> de fecha 17 de mayo de 2023.</p>	<p>Del instructivo de fecha 17 de mayo de 2023, se advierte el incumplimiento por parte del sujeto obligado, <i>PRD</i>, a lo ordenado en la resolución de fecha 28 de septiembre de 2022 y se <b>ordena dar vista Instituto Electoral del Estado de Guanajuato</b>, a efecto de que resuelva lo conducente.</p> <p>Dicho documento fue recibido con posterioridad al cierre de instrucción y emplazamiento, a pesar de que fue solicitada copia certificada del expediente RRPDP-9/2022, el <i>IACIP</i> no adjuntó el acuerdo en el que se decretó el incumplimiento a lo ordenado en la resolución de fecha 28 de setiembre de 2022, sino que hasta el 25 de mayo de 2023, fue</p>	<p>Las probanzas descritas, tienen el carácter de <b>documentales públicas</b>, conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso a) y 462, párrafo segundo de la LGIPE; 359, segundo párrafo y 411, fracción II de la Ley electoral local y 91, segundo párrafo y 98 del reglamento de quejas y denuncias; cuyo <b>valor probatorio es pleno</b>, por haber sido expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones y no ser contradictorias entre sí.</p>

		notificado el instructivo de fecha 17 de mayo en el que se acuerda que el sujeto obligado <i>PRD</i> , no acató a lo ordenado en dicha resolución.	
--	--	--	--

Asimismo, se tienen las siguientes pruebas **documentales privadas**:

Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente	Pruebas obtenidas	Análisis	Valoración
Mediante el auto dictado el 30 de noviembre de 2022, la <i>UTJCE</i> ordenó requerir al instituto político <i>PRD</i> , a efecto de que proporcionara información relacionada con la conducta señalada por el <i>ACIP</i> .	Escrito de fecha 23 de enero de 2023, suscrito por el licenciado José Belmonte Jaramillo, mediante el cual hace manifestaciones con relación al requerimiento formulado por la autoridad sustanciadora mediante auto de fecha 30 de noviembre de 2022	Mediante el original del escrito de fecha 23 de enero de 2023, el ciudadano José Belmonte Jaramillo, manifestó que hasta el momento no se cuenta con alguna persona que ostente o desempeñe el cargo de Titular de la Unidad de Transparencia, en razón de que la persona física que lo desempeñaba ya no se encuentra en el activismo intrapartidario. Asimismo, proporciona los datos de localización de la persona encargada de despacho de dicha unidad.	La probanza antes descrita tiene el carácter de <b>documental privada</b> , conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso b) y 462, párrafo cuarto de la LGIPE; 359, párrafo cuarto; 412 fracción I de la Ley electoral local y 91, cuarto párrafo del reglamento de quejas y denuncias; cuyo valor se considera de indicio.
Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente	Pruebas obtenidas	Análisis	Valoración
Mediante el auto dictado el 14 de febrero de 2023, la <i>UTJCE</i> ordenó requerir al ciudadano Rafael Gasca López, encargado de despacho de la Unidad de Transparencia del instituto político <i>PRD</i> .	Escrito de fecha 17 de febrero de 2023, suscrito por el ciudadano Rafael Gasca López, en el que se anexa: <ul style="list-style-type: none"> <li>Impresión electrónica de régimen fiscal expedido por PIRELLI NEUMATICOS</li> <li>copia simple de credencial de elector</li> </ul>	Mediante original del escrito de fecha 17 de febrero de 2023, suscrito por el ciudadano Rafael Gasca López, manifestó que él no es la persona que busca la autoridad sustanciadora, sino que se trata de un homónimo.	La probanza antes descrita tiene el carácter de <b>documental privada</b> , conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso b) y 462, párrafo cuarto de la LGIPE; 359, párrafo cuarto; 412 fracción I de la Ley

	con clave GSLPRF77011011H 200	Sin embargo, dicha prueba no resulta atendible ya que no guarda relación con los hechos materia de la infracción.	electoral local y 91, cuarto párrafo del reglamento de quejas y denuncias; cuyo valor se considera de indicio.
Forma en la que se allegaron las probanzas al expediente	Pruebas obtenidas	Análisis	Valoración
Mediante el auto dictado el 20 de febrero de 2023, la <i>UTJCE</i> ordenó requerir al ciudadano Rafael Gasca López, encargado de despacho de la Unidad de Transparencia del instituto político <i>PRD</i> .	Escrito de fecha 28 de febrero de 2023, suscrito por Rafael Gasca López, mediante el cual da contestación al requerimiento formulado por la autoridad sustanciadora mediante auto de fecha 20 de febrero de 2023.	Mediante original del escrito de fecha 28 de febrero de 2023, el ciudadano Rafael Gasca López, manifestó que en el momento que ocurrieron los hechos, no se contaba con un titular de la Unidad de Transparencia en virtud de la pérdida de registro en el Estado.	La probanza antes descrita tiene el carácter de <b>documental privada</b> , conforme a lo previsto en los artículos 461, párrafo tercero, inciso b) y 462, párrafo cuarto de la LGIPE; 359, párrafo cuarto; 412 fracción I de la Ley electoral local y 91, cuarto párrafo del reglamento de quejas y denuncias; cuyo valor se considera de indicio.

## SEXTO. Acreditación de la infracción.

En el caso que nos ocupa se actualiza el incumplimiento del *PRD* a sus obligaciones en materia de transparencia en contravención al artículo 33 fracción XXIII de la *Ley electoral local* y, por ende, la actualización de la infracción contemplada en el diverso numeral 346, fracción VIII de dicho ordenamiento legal de acuerdo con lo que se expone a continuación:

- I. El 6 de julio de 2022, la titular de los datos personales solicitó la cancelación/oposición de sus datos personales a la Unidad de Transparencia

del partido político denunciado, solicitud que quedó registrada con el número de folio 110200500001122 de la <<*Plataforma Nacional de Transparencia*>>.

- II. El Titular de la Unidad de Transparencia del partido político denunciado, omitió dar respuesta a la solicitud de los derechos *ARCO*, identificada con el número de folio 110200500001122.
- III. El 8 de agosto de 2022, la persona solicitante interpuso recurso de revisión en contra de la falta de respuesta a la solicitud del ejercicio de sus derechos *ARCO*.

Esto es, la titular de los datos personales solicitó la cancelación del uso de su nombre y fotografía por parte del sujeto obligado *PRD*, ya que, continuaban apareciendo en la página electrónica de dicho ente político, en razón de que la solicitante ya no guardaba ningún vínculo laboral o político con dicho partido, sin embargo, a la fecha de presentación del recurso de revisión, 8 de agosto de 2022, no recibió respuesta por parte del sujeto obligado dentro del plazo de veinte días contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud, como lo dispone el artículo 80, párrafo primero de la *Ley de protección de datos personales*; plazo que de acuerdo al artículo 3, fracción X, del mismo cuerpo normativo, comenzó a correr el 7 de julio y feneció el 5 de agosto, ambos del 2022.

Al respecto la *Ley de protección de datos personales*, establece lo siguiente:

«**Artículo 80.** El responsable deberá establecer procedimientos sencillos que permitan el ejercicio de los derechos *ARCO*, cuyo plazo de respuesta no deberá exceder de veinte días contados a partir del día siguiente a la recepción de la solicitud.»

«**Artículo 3.** para los efectos de la presente Ley se entenderá por:

[...]

X. Días: días hábiles;»

En primer término, el incumplimiento se encuentra acreditado con la copia certificada de la resolución del 28 de septiembre de 2022, dentro del expediente RRPDP-9/2022 aportada al sumario y a la que se le concedió valor probatorio pleno.

Ahora bien, de las constancias remitidas por el *IACIP*, se advierte que, dicha resolución sobre el incumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales a cargo del sujeto obligado *PRD*, derivó de los hechos cuya relatoría se expone:

1. En fecha 28 de septiembre de dos mil veintidós se llevó a cabo la resolución emitida por el *IACIP* mediante la cual se determina en sus puntos resolutivos:

*Primero. - La competencia resultó procedente para conocer y resolver el recurso de revisión con número de expediente RRPDP-9/2022.*

*Segundo. - Se revoca la falta de respuesta por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado a la solicitud de acceso a datos personales identificados con el número de folio 110200500001122 de la <<Plataforma Nacional de Transparencia >>.*

*Tercero. - Se ordena notificar la presente resolución en un plazo no mayor a diez días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de la fecha de dicho fallo.*

*Cuarto. - Se da vista al órgano interior de control del ente político ya mencionado, para que inicie en su caso, el procedimiento de responsabilidad.*

*Quinto. - Se le da salida al expediente en el libro de Gobierno de la Secretaría General de Acuerdos.*

*Sexto. - Se ordena notificar a las partes de conformidad con lo establecido en los artículos 141 y 150 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato.*

2. Mediante acuerdo de fecha 12 de octubre emitido por el Pleno del IACIP, se establece que toda vez que de la resolución señalada en supralíneas se desprende en el punto resolutivo “**Cuarto: se da vista al Órgano interno de control del ente político ya mencionado, para que inicie en su caso, el procedimiento de responsabilidad respectivo**”, se ordenó subsanar mediante auto de fecha doce de octubre del dos mil veintidós del cual versa; “**Cuarto.- Toda vez que del contenido de esta resolución en términos de lo dispuesto en el artículo 194, fracción II de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos obligados para el Estado de Guanajuato, se advierte la probable responsabilidad del titular de la Unidad de Transparencia del Partido de la Revolución Democrática al omitir dar el trámite correspondiente a la solicitud de cancelación de datos personales de la recurrente, los cuales obran en sus archivos, registros, expedientes y sistemas, dese vista al Instituto electoral del Estado de Guanajuato, para que resuelva lo conducente**”.

Lo anterior es así, aunado a la existencia de la infracción imputada, ello al haber incumplido con sus obligaciones en materia de protección de datos personales, como lo establece la *ley electoral local*, pues al respecto cabe recordar que en fecha 28 de septiembre de 2022 el pleno del IACIP determinó el incumplimiento por parte del denunciado, debido a la omisión de dar respuesta a la solicitud de cancelación de datos personales de la solicitante.

Por otro lado, el encargado de despacho de la Unidad de Transparencia del PRD, en el escrito de fecha 28 de febrero de 2023, mediante el cual da respuesta al

requerimiento formulado por la *UTJCE* mediante auto de fecha 20 de febrero de 2023, argumentó medularmente que en el periodo en el cual se hace referencia, no se contaba con un titular de dicha unidad, puesto que se dio una reestructura dentro de su instituto político en virtud de la pérdida de registro en el estado y por ende de las prerrogativas que como partido político le corresponden por lo cual en dicho periodo las obligaciones de transparencia recayeron en el instituto político nacional al estar unificadas en los registros nacionales intrapartidarios.

Por su parte, mediante escrito de fecha 21 de marzo de 2023, signado por el licenciado José Belmonte Jaramillo, en su calidad de representante del *PRD*, menciona la supuesta desaparición de las causas que motivaron este procedimiento, toda vez que al ser consultadas las páginas <https://prdguanajuato.org.mx>, <https://prdguanajuato.org/personal-operativo/> y <https://prdguanajuato.org/comite-transparencia/> según se puede corroborar al ingresar a las mismas, asimismo refiere que no puede acreditar la fecha exacta de cuando se dieron de baja la dirección electrónica y links mencionados, con ello, lo que pretende acreditar el representante del *PRD*, es que al ya no estar vigente y publicada en la web las ligas antes mencionadas, se decreta el sobreseimiento y archivo del presente asunto.

Finalmente, se solicitó el apoyo al Titular de la Unidad de Oficialía Electoral a efecto de dar fe de la existencia y contenido de las ligas electrónicas: <https://prdguanajuato.org.mx>, <https://prdguanajuato.org/personal-operativo/> y <https://prdguanajuato.org/comite-transparencia/>, de la cual se tuvo respuesta mediante ACTA-OE-IEEG-SE-038/2023 la cual constata que no se puede acceder al contenido de las ligas electrónicas referidas.

Cabe señalar que, a efecto de corroborar la veracidad de los motivos de inconformidad, mediante la resolución de fecha 28 de septiembre de 2022, el *IACIP*

constató que efectivamente al ingresar a la liga <https://prdguanajuato.org/personal-operativo/> se desplegaba el nombre y cargo de la persona titular de los datos personales con el cargo de Titular de la Unidad de Transparencia en el Partido de la Revolución Democrática, asimismo sostuvo que si bien no obra información relativa a la fecha en que fue dada de alta como personal operativo, ni tampoco la concerniente a su baja, finalmente con sustento en los artículos 62, párrafo primero y 65 de la *Ley de protección de datos personales*, señaló que asiste el derecho a solicitar la cancelación de los datos personales de la solicitante de los archivos, registros, expedientes y sistemas del responsable, a fin de que los mismos ya no sean tratados ni estén en su posesión.

En este sentido, la omisión de respuesta por parte del partido político denunciado a la solicitud de cancelación de datos personales queda demostrada a partir de la resolución de 28 de septiembre de 2022 emitida por el *IACIP*, máxime que del instructivo de fecha 17 de mayo de 2023, se advierte el incumplimiento por parte del *PRD*, a lo ordenado en la resolución en cita. Por tanto, no resulta atendible las aseveraciones del encargado de despacho de la Unidad de Transparencia ni del partido denunciado, pues la conducta imputada se materializó al no dar contestación a la solicitud de cancelación de datos personales dentro del plazo de 20 días hábiles, establecido por el artículo 80 de la *Ley de protección de datos personales*.

Ahora bien, el artículo 345 fracción I de la *Ley electoral local* establece que los partidos políticos son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones contenidas en dicho ordenamiento legal.

Asimismo, el artículo 346 fracción VIII de la *Ley electoral local* establece como una infracción en que pueden incurrir los partidos políticos el incumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, aunado a que conforme al artículo 33 fracción XXIII de la misma ley, los partidos políticos deben

cumplir las obligaciones que establece la legislación en materia de transparencia y acceso a la información.

Del marco normativo expuesto, se advierte que la ley no distingue entre partidos políticos con registro nacional o local, en virtud de lo cual, resulta inconcuso que los partidos políticos nacionales pueden incurrir en responsabilidad al actualizar las infracciones previstas en la *Ley electoral local*, sin que sea obstáculo para ello que la comisión de la infracción de que se trate se deba a actos u omisiones de sus órganos centrales o de dirección nacional.

Siendo competencia de este *Consejo General*, como se señaló en esta resolución, conocer y resolver lo que en Derecho corresponda por la probable responsabilidad en que incurrió el *PRD*, porque precisamente este procedimiento versa sobre la infracción que actualizó dicho partido político a la *Ley electoral local* con motivo del incumplimiento determinado por el *IACIP* a la *Ley de transparencia*. Es decir, se trata de una violación a disposiciones electorales estatales por parte de un partido político con registro nacional, pero con acreditación ante este *Instituto*.

De esta forma, el estudio concatenado de las circunstancias señaladas conduce a esta autoridad a tener por acreditado el incumplimiento a sus obligaciones en materia de transparencia, particularmente a las establecidas en el artículo 33 fracción XXIII de la *Ley electoral local*, lo cual constituye una infracción a la normatividad electoral en términos de lo previsto en el diverso 346 fracción VIII del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos 25, párrafo 1, inciso x), 27 y 28 de la *ley de partidos*; y por ende, se determina que es procedente sancionar al infractor en los términos establecidos por la propia legislación local.

En efecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha precisado que los partidos políticos, como entidades de interés público, son copartícipes en la

obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho a la información, de forma oportuna y veraz, y por ello los obliga a velar por la observancia del principio de publicidad y la transparencia en su vida interna,<sup>5</sup> de manera que, en casos de incumplimiento, como el que aquí ha quedado actualizado procede imponer la sanción correspondiente.

En suma, se tiene acreditada la infracción imputada al *PRD* en el presente procedimiento sancionador ordinario, al haber quedado plenamente acreditado en autos que el instituto político enunciado incurrió en incumplimiento con relación a sus obligaciones de transparencia previstas en el artículo 33 fracción XXIII de la *Ley electoral local*, lo cual constituye una infracción a la normatividad electoral en términos de lo previsto en el diverso 346 fracción VIII del ordenamiento previamente citado, en relación con los artículos 25, párrafo 1, inciso x), 27 y 28 de la *ley de partidos*.

#### **SÉPTIMO. INDIVIDUALIZACIÓN DE LA SANCIÓN.**

Se procede a determinar la sanción a imponer al *PRD*, en términos de lo establecido en el artículo 354 de la *Ley electoral local*, que dispone:

«**Artículo 354.** Las infracciones señaladas en los artículos anteriores serán sancionadas conforme a lo siguiente:

I. Respecto de los partidos políticos:

- a) Con amonestación pública;
- b) Con multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización Diaria, según la gravedad de la falta. En los casos de infracción a lo dispuesto en materia de topes a los gastos de campaña, o a los límites aplicables en materia de donativos o aportaciones de simpatizantes, o de los candidatos para sus propias campañas, con

---

<sup>5</sup> Al respecto véase el SUP-RAP-54/2019 resuelto por el Pleno de la *Sala Superior*, el tres de mayo de dos mil diecinueve.

un tanto igual al del monto ejercido en exceso. En caso de reincidencia, la sanción será de hasta el doble de lo anterior;

c) Según la gravedad de la falta, con la reducción de hasta el cincuenta por ciento de las ministraciones del financiamiento público que les corresponda a los partidos políticos, por el periodo que señale la resolución;

d) Con suspensión del financiamiento, hasta que se subsane la causa que le dio origen, y

e) En los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución del Estado y de esta Ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político estatal.»

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sostenido que, para individualizar la sanción a imponer a un partido político por la comisión de alguna irregularidad, se deben tomar en cuenta los elementos objetivos y subjetivos que concurrieron en la acción u omisión que produjo la infracción electoral, ello conforme al criterio contenido en la tesis titulada **SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y SE PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES**<sup>6</sup>.

## **1. Bien jurídico tutelado (trascendencia de la norma transgredida).**

El bien jurídico tutelado es aquel valor social material o inmaterial efectivamente protegido por el Derecho, que se contiene en las normas jurídicas vigentes en el Estado y en la comunidad internacional.

En el caso en particular, las disposiciones que se determinaron violadas protegen, el bien jurídico tutelado consistente en el **derecho humano a la protección de**

---

<sup>6</sup> Al respecto véase la tesis XXVIII/2003 de rubro: SANCIÓN. CON LA DEMOSTRACIÓN DE LA FALTA PROCEDE LA MÍNIMA QUE CORRESPONDA Y SE PUEDE AUMENTAR SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS CONCURRENTES, consultable en Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, suplemento 7, año 2004, página 57.

## **datos personales.**

Respecto a la naturaleza del partido político como sujeto obligado, se debe ponderar que, en la especie, cobra particular trascendencia su calidad como garante del bien jurídico antes señalado.

### **2. Singularidad o pluralidad de la falta acreditada o ambas.**

Las conductas sancionables por la norma pueden realizarse en una o varias omisiones, de ahí que se clasifiquen como singulares o plurales.

Así, de lo expuesto en esta resolución, se puede concluir que la conducta atribuible al *PRD* se realizó al incumplir con sus obligaciones en materia de protección de datos personales, que derivó en una vista por parte del *IACIP*, dentro del expediente RRPDP-9/2022 por lo que existe una singularidad de la conducta infractora.

### **3. Circunstancias de modo, tiempo y lugar de la infracción.**

Para llevar a cabo la individualización de la sanción, la conducta infractora debe valorarse en atención a las circunstancias en que se llevó a cabo, como son:

<b>MODO</b>	<b>TIEMPO</b>	<b>LUGAR</b>
La infracción consistió en la omisión del PRD de dar cumplimiento a las obligaciones de en relación con la cancelación de datos personales.	En fecha 8 de agosto del 2022 la persona solicitante interpuso el <i>recurso de revisión</i> en contra de la falta de respuesta a la solicitud del ejercicio de sus derechos ARCO, omisión del PRD.  Así mismo en fecha 28 de septiembre de 2022 el <i>IACIP</i> emitió la resolución	La conducta se realizó en el estado de Guanajuato, lugar en el que <i>PRD</i> , tiene sus oficinas para la atención de los asuntos político-electorales en la presente entidad federativa,

	mediante la cual se revoca la falta de respuesta por la Unidad de Transparencia del sujeto obligado.	específicamente en la <i>Plataforma Nacional de Transparencia</i> .
--	--	---

#### 4. Comisión dolosa o culposa de la falta.

La infracción acreditada en esta resolución es **culposa**, conforme con los siguientes razonamientos.

En principio, debe establecerse que no existen en el expediente en que se actúa elementos o indicios que permitan establecer que la omisión acreditada respecto del *PRD*, haya obedecido a una intención deliberada o a una acción concertada para incumplir sus obligaciones en materia de protección de datos personales, es decir, no obra prueba directa o circunstancial que acredite en este procedimiento que la omisión en que incurrió dicho partido político respecto a la cancelación de los datos personales de la solicitante relacionado con el cumplimiento a sus obligaciones a que se refieren las fracciones XXIII del artículo 33, VIII del artículo 346 de la *Ley electoral local*, en relación con los artículos 25, párrafo 1, inciso x), 27 y 28 de la *ley de partidos*, haya sido consecuencia de algún propósito para incumplir con lo prescrito en la norma, aunado a que tampoco se encuentra probado que el referido incumplimiento haya tenido por objeto cualquier otro fin que pueda considerarse ilegítimo.

En consecuencia, este *Consejo General* considera que la falta denunciada en el presente asunto debe ser considerada con el carácter de **culposa**.

#### 5. Condiciones externas (contexto fáctico) y medios de ejecución.

La conducta desplegada se cometió a través del portal electrónico del *PRD*, puesto que fue en éste donde se omitió la cancelación de los datos personales de la recurrente, no obstante que dicho partido estaba obligado legalmente y que se le ordenó por parte del *IACIP* la cancelación de dichos datos, mediante resolución de fecha 28 de septiembre de 2022.

#### **6. Beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento de obligaciones.**

No se acredita un beneficio económico cuantificable que haya sido obtenido por el denunciado; aunado a que en los procedimientos administrativos sancionadores las multas no se rigen por el monto de lo erogado o gastado, sino por el grado de afectación al bien jurídico tutelado.

#### **7. Reincidencia en la comisión de la falta.**

De conformidad con el artículo 355, párrafo segundo, de la *Ley electoral local*, se considerará reincidente al infractor que habiendo sido declarado responsable del incumplimiento de alguna de las obligaciones a que se refiere la propia ley, incurre nuevamente en la misma conducta infractora dentro de los cuatro años posteriores a la primera declaratoria de responsabilidad.

Para completar lo anterior, es dable referir la jurisprudencia 41/2010, emitida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con el rubro **“REINCIDENCIA. ELEMENTOS MÍNIMOS QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA SU ACTUALIZACIÓN”**,<sup>7</sup> la cual menciona que los elementos mínimos que la autoridad administrativa electoral debe considerar a fin de tener por actualizada la reincidencia, como agravante de una sanción, son:

---

<sup>7</sup> Jurisprudencia correspondiente a la Cuarta Época, Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, número 7, 2010, páginas 45 y 46.

1. El ejercicio o periodo en el que se cometió la transgresión anterior, por la que estima reiterada la infracción;
2. La naturaleza de las contravenciones, así como los preceptos infringidos, a fin de evidenciar que afectan el mismo bien jurídico tutelado, y
3. Que la resolución mediante la cual se sancionó al infractor, con motivo de la contravención anterior, tiene el carácter de firme.

Después de una revisión de los archivos de la *UTJCE*, se advierte que el *PRD* no ha sido sancionado con anterioridad, por resolución ejecutoria, en la que se haya demostrado que cometió la infracción que en el caso se le reprocha, de manera que no concurren los elementos sustanciales para considerarlo reincidente.

## **8. Calificación de la falta.**

La conducta que se sanciona respecto al incumplimiento en las obligaciones en materia de protección de datos personales y en consecuencia las obligaciones de los partidos políticos que vulnera preceptos de la *Constitución*, *ley de partidos*, *ley electoral local*.

En específico se vulneraron los artículos 6, apartado A, fracciones I y II, 16, segundo párrafo de la *Constitución*; y los artículos 33 fracción XXIII y 346 fracción VIII de la *Ley electoral local*, con relación con los numerales 25, párrafo 1, inciso x); 27 y 28 de la *ley de partidos*.

Tomando en consideración que la omisión desplegada por *PRD* implicó que se puso en riesgo el derecho a la protección de datos personales, que no quedó demostrada

la existencia de dolo en la conducta del *PRD*; y al no haber reiteración o sistematicidad en el proceder del partido político, la irregularidad se califica como de **gravedad leve**.

## **9. Sanción a imponer.**

Para determinar el tipo de sanción a imponer debe recordarse que la *Ley electoral local* confiere a esta autoridad, arbitrio para elegir, dentro del catálogo de correctivos aplicables, aquel que se ajuste a la conducta desplegada por el sujeto infractor.

En el caso a estudio, las sanciones que se pueden imponer al *PRD*, por tratarse de un partido político nacional, se encuentran especificadas en el artículo 354, fracción I de la *Ley electoral local*.

Al respecto cabe recordar que, si bien la sanción administrativa debe resultar una medida ejemplar tendente a disuadir la posible comisión de infracciones similares en el futuro, lo cierto es que en cada caso se deben valorar las circunstancias objetivas de modo, tiempo y lugar, así como las condiciones subjetivas a efecto de que las sanciones no resulten inusitadas, trascendentales, excesivas, desproporcionadas o irracionales o, por el contrario, insignificantes o irrisorias.

El artículo citado en último término dispone el catálogo de sanciones a imponer cuando se trate de partidos políticos, como acontece en el caso particular, siendo éstas: **amonestación pública**; multa de cincuenta a mil veces la *UMA*, según la gravedad de la falta, criterio conforme al cual también puede ser reducido hasta en un cincuenta por ciento el financiamiento público que corresponde a un partido político; suspensión de financiamiento y en los casos más graves y de reiteradas conductas violatorias de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato y la *Ley electoral local*, en especial con relación a las obligaciones en materia de origen

y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político estatal.

Tomando en consideración los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, especialmente, los bienes jurídicos protegidos y los efectos de la falta acreditada, se determina que el *PRD* debe ser objeto de una sanción que tenga en cuenta las circunstancias particulares del incumplimiento a la ley y que, además, sirva para disuadir a la persona infractora de la posible comisión de faltas similares en el futuro y prevenga a los demás sujetos de derecho para no incurrir en tales acciones irregulares.

En ese orden de ideas, se considera que la sanción prevista en el artículo 354, fracción I, inciso a) de la *Ley electoral local*, consistente en amonestación pública es idónea, en relación con la gravedad de la infracción y demás elementos mencionados, de manera que, a juicio de esta autoridad, lo procedente es imponer una **amonestación pública**, pues tal medida es idónea a efecto de evitar que dicha conducta se repita en lo posterior.

Al respecto, la *Sala Superior* señaló en la **Tesis CXXXIII/2002** de rubro: **SANCIONES. EN SU DETERMINACIÓN, LAS AGRAVANTES O ATENUANTES DERIVADAS DE UNA CONDUCTA IMPUTABLE A UN PARTIDO POLÍTICO, NO PUEDEN AFECTAR LA ESFERA JURÍDICA DE OTROS SUJETOS O ENTES DISTINTOS A AQUÉL, AUN CUANDO INTEGREN UNA COALICIÓN**<sup>8</sup> que las conductas atenuantes son igualmente circunstancias modificativas de la responsabilidad, que son definidas necesariamente por el efecto sobre la determinación de la sanción, puesto que son aquellas que inciden en el grado en que finalmente se impondrá dicha sanción, y que lo hacen en sentido reductor o

---

<sup>8</sup> Consultable en: <https://www.te.gob.mx/>, Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 195 y 196.

atenuatorio de la misma, sin llegar al extremo de excluirla, ya que se estaría hablando de otra figura jurídica, la de eximentes.

Por ello, las conductas que le fueron imputadas y comprobadas al *PRD* se tratan de infracciones cometidas por el citado partido político de manera culposa. Esto es, sin la intención específica de transgredir las obligaciones en materia de datos personales y en consecuencia de transparencia en materia electoral y se le tuvo por incumpliendo con su obligación de atender la cancelación de los datos personales de la recurrente, lo que no le excluye de su responsabilidad ante las obligaciones que tiene el referido instituto político en materia de protección de datos personales.

Ciertamente, en concepto de esta autoridad, la amonestación pública es proporcional y razonable, ya que, su imposición tiene como finalidad que el denunciado, como entidad de interés público, en términos de lo establecido en la Base Primera del artículo 41, de la *Constitución*, cumpla y vele por que se cumplan, al interior de su vida interna, las disposiciones contenidas en todo el marco normativo vigente, dentro del cual se encuentran, indudablemente, aquellas relativas a los derechos humanos de las gobernadas y gobernados tanto al acceso a la información como a la protección de sus datos personales; de ahí que la presente sanción, se reitera, es idónea, eficaz y proporcional con la falta acreditada en el presente procedimiento.

A ese respecto, la sanción impuesta se encuentra dentro de los parámetros mínimos y máximos que impone la ley y no constituye una afectación a las actividades ordinarias del partido político sancionado.

Por lo anterior, la sanción que se impone resulta adecuada, la misma es proporcional a la infracción cometida y se estima que no resulta excesiva ni ruinosa, aunado a que puede generar un efecto inhibitorio, lo que según ha establecido la

*Sala Superior* en la sentencia del recurso de apelación SUP-RAP-114/2009, es precisamente la finalidad que debe perseguir una sanción.

En suma, con base en lo argumentado en este apartado, tomando en consideración todas y cada una de las circunstancias particulares del caso, la sanción que se impone al partido político es suficiente para inhibir una posible repetición de conductas similares, ya sea por parte del propio partido ahora denunciado u otro sujeto.

Por lo expuesto y fundado, se emite la siguiente:

### **RESOLUCIÓN**

**PRIMERO.** Este Consejo General es competente para resolver el presente asunto.

**SEGUNDO.** La vía del procedimiento sancionador por la cual se tramitó el asunto es la correcta.

**TERCERO.** No se actualizó alguna de las causales de improcedencia o sobreseimiento previstas en la Ley electoral local.

**CUARTO.** Es **existente la infracción** atribuida al *PRD*, en términos de lo establecido en el considerando **SEXTO** de esta resolución.

**QUINTO.** Se **impone** al *PRD* la sanción consistente en la **amonestación pública**, de conformidad con lo establecido en los artículos 354, fracción I, inciso a, y 355, de la *ley electoral local*.

**SEXTO. Notifíquese por oficio** al Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato, **de forma personal** al *PRD* a través de cualquiera de sus representantes acreditados ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, acompañando copia certificada de la presente resolución para los efectos legales conducentes, así como **por estrados** del *Instituto*.

**SÉPTIMO. Publíquese** una vez que haya quedado firme la resolución se ordena publicar en la página institucional de este *Instituto*, con el fin de hacer efectiva la amonestación pública al denunciado.

**Cúmplase.**

Así lo resolvió el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Firman la presidenta y secretaria ejecutiva del mismo. **Conste.**